



**Fondo
Acción**

Con los pies en el bosque

Historia, lecciones y aprendizajes de la participación de Fondo Acción en el mecanismo REDD+ y el mercado de carbono

Angélica Beltrán

Consultora

María Margarita Fontecha

Coordinadora Desarrollo y Gestión de conocimiento

Natalia Jiménez

Profesional Desarrollo y Gestión de conocimiento

Octubre de 2020

Ficha

Nombre del proyecto o programa	Portafolio REDD+ comunitario en el Chocó Biogeográfico
Entidad líder	Fondo Acción
Punto de contacto	elfondo@fondoaccion.org
Autor (es)	Angélica Beltrán, consultora María Margarita Fontecha, coordinadora Desarrollo y Gestión de conocimiento Natalia Jiménez, profesional Desarrollo y Gestión de conocimiento
Otros actores involucrados (instituciones)	<ol style="list-style-type: none">1. Consejo Comunitario Acapa2. Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera3. Consejo Comunitario del Río Cajambre4. Consejo Comunitario de Bajo Calima5. Consejo Comunitario La Plata Bahía Málaga6. Consejo Comunitario de Concosta7. Consejo Comunitario de Sivirú8. Consejo Comunitario de San Andrés de Usaragá9. Consejo Comunitario de Pilizá10. Consejo Comunitario de Pizarro11. Consejo Comunitario de Acaba12. Consejo Comunitario de Río Pepé13. Consejo Comunitario de Montañó14. Consejo Comunitario de Vigía de Curvaradó15. Consejo Comunitario Santa Rosa del Limón16. Consejo Comunitario de Apartadó-Buenavista17. Consejo Comunitario Río Domingodó18. Consejo Comunitario Chicao y La Madre19. Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Cuenca Del Río Tolo y Zona Costera Sur (Cocomasur)20. Cabildo Mayor Mutatá: Cabildos Jaikerazabi, Chontadural Cañero y Coribí Bedadó
Fecha de esta versión	Octubre 2020

Introducción

Este documento aborda el papel del Fondo Acción en los últimos doce años en la consolidación del Portafolio REDD+ comunitario en el Chocó Biogeográfico. A lo largo de estos años, la organización ha tenido la oportunidad de la mano de las comunidades y con distintas responsabilidades como aliado para el fortalecimiento comunitario, implementador de proyecto, facilitación comercial y administrador de los recursos derivados de las ventas. Este caso de estudio busca evidenciar de manera general cómo el Fondo Acción llegó a una de las geografías más alejadas del país y facilitó la consolidación de un mecanismo financiero que asegura i) la conservación de los bosques, ii) promueve mejores condiciones de vida de las comunidades y iii) contribuye a la agenda de cambio climático y desarrollo del país.

El Portafolio REDD+ comunitario en el Chocó Biogeográfico está compuesto por nueve proyectos REDD+ verificados por la Alianza para el Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB) y el Estándar de Carbono Verificado (VCS). Estos proyectos cubren 710.000 hectáreas de bosque que son protegidas y manejadas por decisiones propias de las comunidades étnicas, para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. Los dueños de los proyectos son 19 consejos comunitarios afrocolombianos y un cabildo mayor indígena dueños de territorios colectivos donde viven cerca de 8.000 familias y más de 40.000 personas. Los protagonistas de esta historia son los pueblos afro e indígenas del Pacífico:

- Consejo Comunitario Acapa
- Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera
- Consejo Comunitario del Río Cajambre
- Consejo Comunitario de Bajo Calima
- Consejo Comunitario La Plata Bahía Málaga
- Consejo Comunitario de Concosta
- Consejo Comunitario de Sivirú
- Consejo Comunitario de San Andrés de Usaragá
- Consejo Comunitario de Pilizá
- Consejo Comunitario de Pizarro
- Consejo Comunitario de Acaba
- Consejo Comunitario de Río Pepé
- Consejo Comunitario de Montaña
- Consejo Comunitario de Vigía de Curvaradó
- Consejo Comunitario Santa Rosa del Limón

- Consejo Comunitario de Apartadó-Buenavista
- Consejo Comunitario Río Domingodó
- Consejo Comunitario Chicao y La Madre
- Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de la Cuenca Del Río Tolo y Zona Costera Sur (Cocomasur)
- Cabildo Mayor Mutatá: Cabildos Jaikerazabi, Chontadural Cañero y Coribí Bedadó

Para 2017, el portafolio había asegurado cerca de 7 millones de toneladas de reducción de emisiones de carbono equivalente. Este resultado fue producto de las acciones desarrolladas (sistemas productivos, gobernanza forestal, y monitoreo, reporte y verificación) por las comunidades con el acompañamiento del Fondo Acción y la financiación de USAID en los últimos años. Estas toneladas se traducen en certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, llamados créditos de carbono. Estos créditos han encontrado compradores en el sector privado, con empresas que, en el marco de su responsabilidad social y ambiental y/o dando cumplimiento a sus obligaciones ambientales, decidieron apoyar estas iniciativas, buscando la carbono neutralidad de sus procesos. Dentro de las entidades que han creído en este portafolio se destacan, entre otras, Prodeco, British Petroleum, Biomax e ITAU.

Gracias a los recursos provenientes de la comercialización de los créditos de carbono, las comunidades han fortalecido sus capacidades para el desarrollo de sistemas productivos de cultivos de achiote, naidí (açai), coco, cacao, y también actividades de ecoturismo y pesca responsable, así como para la planeación y ejecución de acciones que permitan la gobernanza forestal, la defensa territorial y que potencien su buen vivir. Lo anterior acorde con su autodeterminación y cultura, demostrando que la conservación y la productividad son posibles en estos territorios.

Para consolidar REDD+ como mecanismo financiero sostenible en el Chocó Biogeográfico, la mayoría de los proyectos han recibido recursos de la cooperación internacional, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Fondo Colombia Sostenible (FCS) a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También hay que mencionar que, si bien el Fondo Acción ha tenido un rol mayoritariamente técnico, también apoyó con recursos financieros a los proyectos para lograr la verificación a través de un mecanismo de fondeo.

►► ¿De dónde partimos?

“Buscamos mantener una vida digna para los renacientes no solo nuestros hijos, sino los de toda la flora y la fauna del Chocó Biogeográfico”.

Bernardo Orobio, Consejo Comunitario Bajo Calima.

El Chocó Biogeográfico, de acuerdo con el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), es reconocido como una de las regiones con más alta biodiversidad y mayor pluviosidad del planeta. Su riqueza natural se ha visto amenazada por diversas actividades extractivas legales e ilegales de recursos naturales como madera y minerales. Muestra de ello es la deforestación que, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), presentó una tendencia alza aumentar desde el año 2000, con periodos de reducción e inestabilidad hasta la actualidad (Ver tabla 1).

Periodo	Ha deforestadas
1990-2000	140.016
2000-2005	148.537
2005-2010	139.484
2010-2012	9.407
2012-2013	5.028
2013-2014	13.855
2014-2015	12.206
2015-2016	29.009
2016-2017	13.474
2017-2018	7.454
2018-2019	14.120

Tabla 1. Histórico de hectáreas deforestadas en el Pacífico colombiano Fuente: Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. IDEAM. 2020.

La diversidad del Pacífico colombiano también está en sus habitantes, siendo una región pluricultural, con presencia de comunidades indígenas y pueblos afrocolombianos,

quienes han habitado el territorio y han generado una relación y cultura propia alrededor de los bosques, selvas ríos y manglares.

Estas comunidades han tenido que enfrentar violencia y desplazamiento, así como las consecuencias de la degradación de los ecosistemas y la deforestación. Todo lo anterior pone en riesgo su seguridad alimentaria, modos de vida y subsistencia, así como el libre desarrollo de su cultura; en otras palabras, lo que ellas y ellos denominan su buen vivir.

REDD+, la alternativa

Bajo estas condiciones de degradación ambiental y conflictos, se identifica el mecanismo REDD+ como una alternativa de uso sostenible del bosque en el Chocó Biogeográfico. Colombia fue uno de los países que impulsó la definición del mecanismo en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), como una estrategia para contribuir a la mitigación del cambio climático, reducir la deforestación y potenciar acciones para la conservación de los bosques. El país decidió entonces iniciar su proceso de preparación para REDD+, a través de la formulación de una estrategia nacional y con el desarrollo de iniciativas de implementación temprana, conocidas como proyectos REDD+, que buscaban conectarse con el mercado voluntario de carbono.

¿Qué es REDD+?

REDD+ es un mecanismo que se origina en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y que puede ser operado por gobiernos o por agentes privados. Aunque desde 1999, países como Costa Rica y Papúa Nueva Guinea impulsaban la necesidad de contar con un mecanismo financiero para contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) a causa de la deforestación, fue en 2007 en la Cumbre de Bali (Indonesia) que se estableció este mecanismo. Pero ¿qué significa?:

Reducción de Emisiones de GEI mediante la reducción de la deforestación y degradación de los bosques + el bienestar social, la conservación de los bosques, la gestión forestal y el incremento de las reservas de carbono en los bosques.

En el caso del sector privado, los proyectos REDD+ pueden verificar la reducción de emisiones de CO₂ por medio de entidades acreditadas ante la Convención o por el país, quienes, a través de estándares, certifican aquellos proyectos que han logrado realizar una reducción efectiva de la deforestación y degradación. Esto genera créditos

de carbono que pueden ser comprados por empresas, entidades o personas que busquen mitigar su huella de carbono. A esto se le llama mercado voluntario de carbono.

Dentro de los estándares de mayor nivel se encuentran el Estándar de Carbono Verificado (VCS, por sus siglas en inglés) y la Alianza de Comunidad, Carbono y Biodiversidad (CCB, por sus siglas en inglés), hoy consolidados en la firma VERRA, quienes validan que el desarrollo de los proyectos se realice con la comunidad, respetando la biodiversidad del área, y aportando a la protección climática. También verifican cuántas toneladas de CO₂ se dejaron de emitir gracias a las acciones del proyecto.

El camino en iniciativas de implementación temprana estuvo liderado por una comunidad del municipio de Acandí, localizada al norte del Chocó Biogeográfico en límites con Panamá, organizada bajo el consejo comunitario del río Tolo y Zona Costera Sur (Cocomasur). En la búsqueda de opciones reales para proteger su territorio y lograr permanecer en él, Brodie Ferguson y su empresa AnthroTECT se conectaron con Cocomasur y construyeron la propuesta de desarrollar un proyecto REDD+. En el año de 2009, llegaron a un acuerdo y empezaron a desarrollar el primer proyecto REDD+ de Colombia.

Más adelante, en 2011, USAID, con su programa BioREDD+ y operado por Chemonics International, buscaba continuar sus esfuerzos de conservación de los bosques del



Chocó Biogeográfico, mediante el desarrollo de proyectos REDD+ para el mercado voluntario de carbono, la realización de acciones sostenibles en la minería artesanal a pequeña escala y la conservación de la biodiversidad. Lo anterior a través del trabajo con consejos comunitarios de comunidades afrocolombianas y resguardos.

Es importante resaltar que REDD+ es un mecanismo complejo tanto por el gran esfuerzo en su diseño como por el alto grado de compromiso comunitario que exige; además, porque se trata de proyectos planteados a más de 30 años. Esto demanda compromiso comunitario y experticia técnica, jurídica, en manejo de recursos, personal, relaciones comerciales, entre otras, por parte de las partes involucradas, especialmente al momento de buscar la validación y verificación por parte de estándares internacionales como VCS y CCB, de los créditos de carbono generados por los proyectos.

Dentro de los requerimientos exigidos por estos estándares, se encuentra el de contar con una entidad experimentada en el manejo financiero acorde con los requisitos legales del país, y la administración de recursos. Cocomasur y AnthroTECT acordaron buscar a Fondo Acción para esta tarea, debido a su reputación y solidez dentro del sector ambiental. Mientras tanto, el Fondo Acción trabajaba con empresas como el Grupo de Energía de Bogotá en el diseño de proyectos en el marco del mecanismo de desarrollo limpio, definido por el protocolo de Kioto de la CMNUCC, y participaba del espacio de diálogo técnico conformado por las ONG ambientales del país y el Ministerio de Ambiente para la formulación de la Estrategia Nacional REDD+. Así mismo, desarrollaba actividades en el fortalecimiento de capacidades para facilitar la comprensión del mecanismo REDD+ en comunidades indígenas de la Amazonia.

Progresivamente, este papel fue evolucionando en un mayor involucramiento del Fondo en los componentes técnicos y sociales de los proyectos. A través de talleres



Intercambio de conocimientos con Cocomasur, 2016.

de gobernanza, fortalecimiento de capacidades contables, financieras y de administración de recursos, el Fondo apoyaba a Cocomasur en su decisión de tener el mecanismo REDD+ andando. Para el año 2012, este proyecto REDD+ sería el primero en Colombia en generar créditos de carbono verificados. Cocomasur se consolidaría entonces como la primera comunidad étnica en desarrollar un proyecto REDD+ exitoso en su territorio, Anthroctect como la primera entidad desarrolladora en el país y el Fondo Acción como su aliado fiduciario.

Entre tanto, para el 2013, BioREDD+ había reunido a 20 comunidades étnicas para avanzar en el diseño de proyectos REDD+ en sus territorios. Sin embargo, la entidad ejecutora y el donante se enfrentaron a una realidad compleja, relacionada con el fortalecimiento de las comunidades, las distancias para llegar a los territorios, las exigencias logísticas para las reuniones, entre otros retos. Ante esta necesidad y buscando experiencias exitosas, USAID contrató a Fondo Acción para diseñar y poner en marcha instrumentos que llevaran a buen término ese componente en los proyectos REDD+.

El Fondo aceptó el reto y, para ello, generó una alianza con Cocomasur, por su conocimiento, experiencia y su capacidad para apoyar los procesos de toma de decisiones en comunidades étnicas con territorios colectivos. Juntos diseñaron una gira por los territorios para cerrar las brechas de confianza e información. Así, las dos organizaciones adelantaron visitas y talleres de capacitación sobre REDD+ en los territorios, permitiendo que líderes comunitarios como Everildys Córdoba, Ferney Caicedo, Rosana Córdoba y Eusebio Guisao, desde su experiencia, con su visión propia y fortalecidos por estrategias como, compartieran su historia y aportaran al conocimiento de las comunidades sobre el desarrollo de estos proyectos.

De este proceso uno de los aprendizajes fue ver que el diálogo entre pares, y en este caso entre comunidades étnicas, es clave para i) entender conceptos complejos como REDD+ y ii) generar confianza para los siguientes pasos del proyecto. También, HARMOS* fue la puerta de entrada para identificar capacidades en las comunidades, que potenciaran el desarrollo del mecanismo. En mayo de 2015, BioREDD+ llegó a su fin, dejando ocho (8) proyectos REDD+ diseñados y validados por un auditor internacional, a puertas de iniciar la segunda fase con el desarrollo actividades de proyecto, como sistemas productivos alternativos para reducir la deforestación y degradación de los bosques y, al final, lograr la verificación de las toneladas de carbono no emitidas gracias al proyecto. Gracias al proceso previo de Fondo Acción en el Chocó

*HARMOS es un programa creado por Fondo Acción, que busca fortalecer a las organizaciones y líderes comunitarios a través del *coaching*. El programa fortalece competencias del ser: liderazgo, comunicación, resolución de conflictos; hasta el hacer: contabilidad, elaboración de proyectos, gestión de recursos, gerencia de proyectos. La meta es estimular el crecimiento y la transformación personal y laboral (Pombo, A. et al. 2014).



Mapa de los proyectos REDD+. Elaboración propia.

Biogeográfico y los avances de esta organización en Caquetá por el Programa Paisajes Conectados, USAID designó a Fondo Acción como implementador de proyecto y dio origen a Paisajes Conectados Pacífico, para lograr los procesos de validación y verificación ante los estándares VCS y CCB.

Mientras tanto, Colombia continuaba el proceso de preparación para REDD+ a través de procesos de diálogo con actores clave, levantamiento y análisis de información, evaluación de impactos, riesgos y beneficios, monitoreo de los bosques y el carbono forestal, y el sistema nacional de las salvaguardas ambientales y sociales. Cocomasur ya había verificado créditos, pero también había comprobado que su venta no era tan sencilla y los proyectos BioREDD+ aún necesitaban músculo financiero y técnico para llegar a buen fin. Con estas condiciones iniciales, el Fondo Acción, que era ahora el implementador, ponía sobre sus hombros las expectativas que el Gobierno tenía sobre la potencialidad de mitigación de los proyectos, las grandes esperanzas de las comunidades —quienes aún tenían dudas sobre la compra y venta de servicios—, así como el alcance y los pormenores de los proyectos y el acuerdo con un cooperante que había hecho una inversión importante de recursos.

A toda marcha

En 2015, Fondo Acción dio inicio a su labor de implementador de los proyectos.

Construir sobre lo construido no era una tarea sencilla. Así lo han contado varios de los entrevistados para este caso de estudio. Lo anterior debido a que ahora el Fondo debía ejecutar proyectos diseñados entre el ejecutor de BioREDD+ y las comunidades.

El primer reto del Fondo Acción fue llevar los conceptos sobre REDD+, usando un lenguaje sencillo, a unas comunidades que, luego de un proceso de casi cuatro años, empezaban a dudar de la materialización de sus objetivos y beneficios. En palabras de Bernardo Orobio del C.C Bajo Calima: “¿Cómo se cosecha lo intangible?” REDD+ no es fácil de entender, por lo que el conocimiento y experiencia ganada por el Fondo Acción, de la mano de Cocomasur, fue decisivo para facilitar en las comunidades la gestión del conocimiento en un lenguaje apropiado, incluyendo traducciones a lengua embera para las comunidades indígenas. Los entrevistados del caso de estudio recuerdan que, para este momento, incluso se cuestionaba la efectividad del mecanismo, la transparencia en el manejo de recursos y la distribución de los beneficios. Se generó mucho ruido externo.

Para dar mayor tranquilidad y confianza a las comunidades, durante este proceso se desarrollaron herramientas y materiales culturalmente apropiados, desde infografías y cartillas que explicaban temas de cambio climático y REDD+, videos que contaban las experiencias, caminatas de reconocimiento del territorio, hasta reuniones de

intercambio cultural con otros consejos comunitarios. Lo anterior impulsó la conversación y conexión entre las comunidades, lo cual desembocó en sentir colectivamente el territorio, pensarlo y soñarlo y así, actuar para su conservación.

Para el observador externo, las comunidades afrocolombianas del Chocó Biogeográfico y los pueblos indígenas constituyen grandes familias que comparten no solo el espacio, sino también costumbres e ideales. Pero quien camina estas tierras puede observar las diferencias existentes, las cuales necesitan ser reconocidas, respetadas y plasmadas cuando se busca hacer una apuesta de tan largo alcance, como los 30 años que puede durar un proyecto de este tipo.

Reconociendo estas particularidades, Fondo Acción desarrolló REDD+ con las comunidades desde su sentir, lo que les permitió pensar e identificar futuros posibles para luego hacerlos realidad. Esta internalización de los conceptos, este reconocimiento del proyecto como propio permitió que los siguientes pasos se dieran con firmeza y mayor velocidad.

Tanto para las comunidades afrocolombianas como indígenas, REDD+ se convirtió en la excusa, en el trampolín para realizar el ordenamiento de sus territorios de manera autónoma. En otras palabras, su buen vivir sirvió de brújula para construir alternativas y maneras de permanecer, pervivir en el territorio que habitan, en armonía con la naturaleza, desde su reconocimiento propio y cultura.

Para cada consejo comunitario y resguardo indígena ese buen vivir puede tener significados distintos. Para las comunidades indígenas de Mutatá, la inserción del conocimiento ancestral, en especial la recuperación de su medicina tradicional, es de vital importancia. En el caso de las comunidades afrocolombianas, se resalta la importancia del uso de los recursos para la cultura “(...) Somos artistas, buscamos usar sin violentar, necesitamos cortar el árbol para la casa, para la marimba, el cuero del venado para el cununo”, dijo uno de los entrevistados.

No obstante, todo este sueño de vivir en armonía en el territorio y sus ecosistemas no sería posible si no se lograba la verificación y venta de los créditos de carbono. La condición era reducir la deforestación y degradación de los bosques, y los proyectos productivos se perfilaban como la herramienta principal para conseguir reducir la presión sobre el bosque. Sin embargo, era 2015 y las alternativas productivas planteadas en los proyectos originales no parecían entonces viables debido a que las condiciones de los mercados, de los posibles compradores y de las mismas comunidades habían cambiado. Fue entonces necesario trabajar las expectativas que se habían generado, actualizándolas, respecto a los recursos disponibles en ese momento como a la realidad de los mercados y del territorio.

Se decidió entonces, junto con las comunidades, fortalecer cadenas productivas existentes en algunos consejos comunitarios. Actividades de producción de cacao, coco,

achiote, naidí y chontaduro, así como la pesca y el turismo fueron las seleccionadas. Para este fortalecimiento se hicieron pilotos de comercialización de las cadenas productivas priorizadas de coco, cacao, achiote y naidí. También se definió implementar una nueva línea de forestería comunitaria aún por desarrollar, para el caso de Carmen del Darién.

Al mismo tiempo, era importante seguir trabajando la línea de monitoreo, reporte y verificación (MRV). Esto significaba establecer las parcelas forestales y adelantar las mediciones, tanto de carbono como de indicadores sociales y de biodiversidad. Esta información generaría los insumos para construir los reportes de verificación. Para coordinar y realizar las actividades, incluyendo las de MRV, cada proyecto, con sus características propias, contó con una unidad REDD+, cuyo equipo incluyó representantes de las comunidades. Para estas personas, quienes en muchos casos venían de trabajar toda su vida como aserradores, este proceso integró su conocimiento del bosque con la protección del mismo, generando para ellos y sus familias el ingreso necesario a partir de una alternativa sostenible, la cosecha de carbono y una producción agropecuaria sostenible. Este proceso, mucho más largo y costoso que traer a profesionales de otros lugares, pero mucho más sostenible y equitativo, hace parte de la esencia de REDD+ como la ha entendido el Fondo Acción; es una apuesta por la generación de capacidades que generen un cambio real en el territorio y las comunidades, garantizando la sostenibilidad de los esfuerzos.

El papel de las comunidades como implementadoras dejó resultados importantes en términos de mejoramiento de cadenas productivas, fortalecimiento del control y toma de decisiones sobre el territorio por parte de las instancias colectivas, y acuerdos y acciones que permitieran la conservación del bosque. Gracias al trabajo paralelo entre los componentes de gobernanza, productivos y MRV fue posible que los proyectos vieran la oportunidad de verificarse y, por fin, tener bonos de carbono para la venta. En otras palabras, la promesa se iba materializando hacia finales del 2018. En su papel como implementador, Fondo Acción se enfrentó a retos y circunstancias que fueron difíciles de sortear: las grandes distancias, la dificultad de comunicación y conectividad; las dificultades para atender los requisitos de ley para contratar por parte de las comunidades (pocas personas cuentan con RUT o procesos asociativos legalmente conformados); los altos costos de imágenes de sensores remotos escogidas para el monitoreo de la deforestación en los proyectos, y riesgos asociados al orden público y a las condiciones de variabilidad climática. Hoy, al preguntar cómo se sortearon las dificultades, los directivos y el equipo sonríen, y reconocen que la creatividad y flexibilidad fue clave. En palabras de abogados, contadores y técnicos, había que “buscarle la comba al palo”.

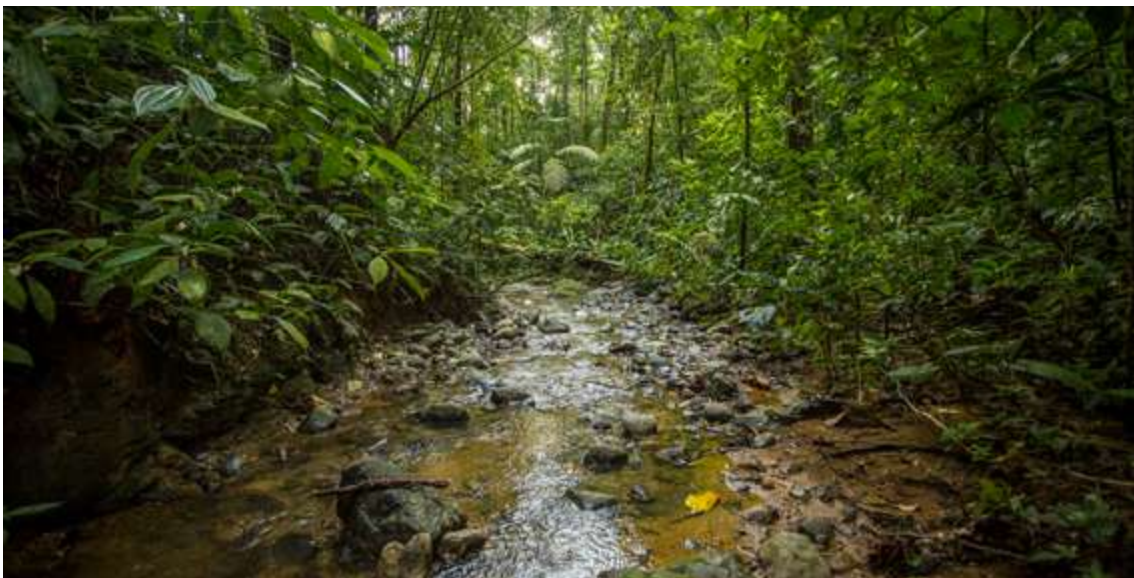
Todas estas acciones requirieron de procesos de capacitación y fortalecimiento de las comunidades no solamente en temas técnicos, sino también en conocimientos

financieros y administrativos. Para esto se han desarrollado múltiples herramientas y mecanismos, como, por ejemplo, pasantías en las oficinas del Fondo Acción para fortalecer temas contables y de manejo de presupuesto; estimular acuerdos y resolución de conflictos al interior de las comunidades, cerrar brechas de conocimiento técnico con equipos locales de monitoreo y acuerdos entre distintos proyectos de cooperación internacional y entre organizaciones son ánimo de lucro, consultores y comunidades.

Sin embargo, el mayor reto que enfrentó el portafolio REDD+ fue la terminación de la financiación por parte de USAID, a través de Paisajes Conectados, en un momento en el que las comunidades no tenían recursos para cumplir los requisitos de MRV para la verificación de los mismos.

Fue Fondo Acción quien asumió un nuevo papel como donante y financiador. Después de ocho años de trabajo con las comunidades y con la convicción firme de crear territorios posibles, Fondo creó una figura conocida como “fondeo”, que consiste en entregar recursos a los consejos comunitarios para cubrir costos de actividades de verificación, recursos que debían ser reintegrado en su totalidad al Fondo Acción. El valor prestado sería devuelto al Fondo por los consejos comunitarios sin intereses, luego de la venta de los créditos de carbono. Este voto de confianza del Fondo Acción en las comunidades fue finalmente respaldado por el Fondo Colombia Sostenible FCS-BID, quien también aporta recursos para las actividades de MRV, gobernanza y desarrollo productivo, empezando en diciembre de 2019, momento crítico para la sobrevivencia de los proyectos. Con la firma de este acuerdo se daría inicio formalmente al proyecto de Apoyo al Portafolio REDD+ en el Chocó Biogeográfico, primera donación en la historia del Fondo Colombia Sostenible. La donación del FCS fue posible gracias a los aportes de los gobiernos de Noruega, Suiza y Suecia a este Fondo.

En palabras del director administrativo y financiero de Fondo Acción, Germán Botero, el Fondo desarrolló una figura de “mezzanine” entre los dos pisos: de administrador



de recursos y de implementador. Lo anterior, apoyando el desarrollo del portafolio, acomodándose a las necesidades de las comunidades, asegurando así el poder cumplir con los estándares, acercando la realidad de los proyectos a las expectativas de los donantes y de los posibles inversionistas, como también generando puentes entre estos proyectos y los procesos nacionales sobre el mecanismo REDD+.

La cosecha de carbono, el mercado y los nuevos retos

En 2019 se logró la verificación de créditos de carbono por 7'055.091 toneladas de reducción de emisiones. Aquí se hizo evidente cómo el concepto de portafolio, más allá de nueve proyectos REDD+ independientes, había sido interiorizado por las comunidades. Desde entonces, hablaron de “nuestro carbono”, diseñaron mecanismos de distribución de beneficios e hicieron incidencia juntos. Para la verificación de 2019 el Programa Páramos y Bosques financiado por USAID, trabajó en conjunto con Fondo Acción para elaborar documentos y apoyar componentes técnicos de esta tarea.

A la par que se alcanzaba la cosecha surgió otro reto: la venta de los créditos. Cuando Bioredd+ y Cocomasur iniciaron el diseño y desarrollo de sus proyectos REDD+, existían expectativas muy positivas frente a la venta de créditos de carbono en el mercado voluntario; sin embargo, como lo recuerda Thomas Black, especialista de cambio climático de la misión de USAID en Colombia, el mercado REDD+ no despegó como se esperaba, el Protocolo de Kyoto no funcionó y los mercados internacionales se desplomaron, dejando un largo espacio de tiempo en que los proyectos de carbono en el mundo quedaron sin comprador. Y aunque el riesgo era alto, el país atravesaba un cambio en términos políticos y reglamentarios que darían vida al mercado nacional de carbono.

En Colombia, mientras el Portafolio REDD+ Pacífico iba avanzando, también el país lo hacía en la preparación para REDD+. Para 2018, se aprobó la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, nombre dado a la estrategia nacional REDD+. Allí el Fondo Acción ha tenido un rol fundamental gracias al apoyo que ha brindado al Gobierno nacional en la administración de los recursos del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y a la participación en el programa de fortalecimiento de capacidades de ONU REDD+, específicamente con comunidades afrocolombianas y grupos de mujeres negras del Chocó Biogeográfico. Esta integración vertical entre los ámbitos de política pública y el territorio ha facilitado la participación de comunidades en los procesos de toma de decisiones y construcción de política.

Un ejemplo de esto fueron las giras de fortalecimiento de capacidades al territorio de Cocomasur por parte de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas de diferentes regiones del país, así como representantes de entidades del Gobierno nacional y autoridades ambientales. También, el reconocimiento del proyecto de Cocomasur como una experiencia exitosa para intercambios de cooperación entre países Sur-Sur, con el apoyo de APC-Colombia.

Estrategia REDD+, Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques

El objetivo de esta estrategia es: “reducir la deforestación y degradación de los bosques promoviendo y estableciendo una gestión forestal en el territorio colombiano, bajo un enfoque de desarrollo rural integral sostenible, que coadyuve al buen vivir de las comunidades locales, contribuya al desarrollo local, aumenté la resiliencia ecosistémica y fomente la adaptación y mitigación del cambio climático”.

Para lograr este objetivo se establecieron las siguientes líneas de acción:

Línea 1. Gestión sociocultural de los bosques y conciencia pública.

Línea 2. Desarrollo de una economía forestal y cierre de la frontera agropecuaria.

Línea 3. Gestión transectorial del ordenamiento territorial y los determinantes ambientales.

Línea 4. Monitoreo y control permanente.

Línea 5. Generación y fortalecimiento de capacidades legales, institucionales y financieras.

La experiencia que se consolidó en el monitoreo de bosques y sus recursos naturales por parte de las comunidades a través del Portafolio REDD+ también permitió la participación activa y efectiva del Fondo en la Mesa Interinstitucional de Monitoreo Comunitario Participativo liderada por el IDEAM; espacio que busca articular las acciones y los esfuerzos del Sistema de Monitoreo de Bosque y Carbono (SMBByC) con las iniciativas de monitoreo lideradas por comunidades en el territorio nacional. También, permitió a las comunidades participar activamente en la Mesa Nacional de Monitoreo Comunitario, logrando el intercambio de conocimiento y experiencias con comunidades de todo el país.

En 2016, el Gobierno nacional, mediante la Ley 1819, creó el impuesto al carbono, el cual dinamizó el mercado que, hasta ese momento, era marginal y dominado por compradores fuera del país. El impuesto consiste en el pago de una tarifa por la cantidad de carbono emitido, derivado del consumo de combustibles fósiles líquidos. Se generó

también, bajo este mismo marco, la posibilidad de no pagar dicha tarifa si se certifican inversiones de la empresa en ser carbono neutral.

Esta ley pasó a ser reglamentada por el Decreto 926 de 2017, el cual determina que se puede certificar 'ser carbono neutro' únicamente cuando se neutralizan las emisiones de GEI generadas por el uso de los combustibles fósiles, es decir, se presentan créditos de carbono correspondiente a las emisiones generadas, generados en la operación propia o adquiridos a terceros. Dentro de los proyectos elegibles para este esquema se encuentran todos aquellos que puedan demostrar, mediante la verificación de una tercera parte acreditada, la generación de resultados de mitigación de GEI confiables. Aquí entran los proyectos REDD+ que cumplan con la verificación de un estándar independiente y que sean registrados en una plataforma, como en el caso de VCS, CCB y VERRA.

El nuevo contexto abre la posibilidad para que los bonos de carbono producidos por el portafolio REDD+ fueran ofrecidos en este nuevo mercado. Así, Fondo Acción hizo un acuerdo con las comunidades para jugar un papel de facilitador comercial en la venta de los créditos de carbono. Esto exigía el entendimiento de la reglamentación, sus alcances y condiciones, para poder realizar la búsqueda de los posibles compradores. La directora jurídica de Fondo Acción, junto con su equipo tuvieron que aprender los pormenores de este nuevo mercado, para llevarlo a las comunidades y a los compradores.

Fue necesario igualmente elaborar los contratos de administración y compra de reducción de emisiones verificadas (ERPA, por sus siglas en inglés), de forma que fueran totalmente entendidos por las comunidades dueñas de los proyectos y satisfactorios no solo para estas sino para los compradores.

El equipo de Fondo Acción y las mismas comunidades reconocen el reto que representó pasar de la oralidad y los acuerdos de palabra a lo escrito, a los convenios, a los contratos. El reto fue vencer los temores de las comunidades que, en muchos casos, habían sido abordados por intermediarios que ofrecían tratos injustos de asignación de porcentajes sobre la venta de los créditos del carbono. Era clave aprender a determinar y tener muy claras las reglas de juego concertadas desde el principio, para demostrar que las comunidades pueden asumir responsabilidades dentro de los proyectos, más allá de ser asistentes en campo para los inventarios, asistir a talleres o medir árboles. Como dice Everildys Córdoba de Cocomasur: "Las comunidades no somos un "dron", somos socios y acompañantes".

Para este momento, gracias al mercado interno, encontrar compradores dejó de ser el reto y se transformó en el vehículo para canalizar recursos de sector corporativo a la conservación y a la mitigación del cambio climático. Para esto, una vez más la confianza entre las comunidades y el Fondo Acción marcó la diferencia. Para las comunidades era importante saber quién iba a comprar ese carbono que ellos habían cosechado con tanto esfuerzo; saber que no iba a ser utilizado por empresas que no estuvieran

comprometidas con el país, con la paz, con las comunidades y con la protección del medioambiente. Así mismo, para los compradores, era importante saber que esa inversión estaba respaldada por estándares confiables; que ese carbono tenía detrás un andamiaje robusto que aseguraba su permanencia, haciendo válidos los créditos a comprar. Con estos intereses, tanto de las comunidades propietarias de los créditos de carbono como de los compradores interesados empezaron las rondas de negocios en las que ambas partes se empezaron a conocer y donde la confianza fue clave para llegar a buen término.

Prodeco, empresa multinacional del sector minero energético, fue uno de los primeros compradores de estos créditos, abriendo el camino para otras empresas que decidieron creer en el portafolio comunitario REDD+ Pacífico. En palabras de Sergio Petro, el gerente socioambiental de ese momento, este proceso de compra requiere de un conocimiento y entendimiento previo por parte de la empresa compradora, a la par de un profundo compromiso con el aspecto ambiental, más allá de lo exigido por la legislación vigente. Felizmente, en el caso de Prodeco, estas condiciones se cumplieron, gracias al interés de esta empresa y al compromiso de las comunidades, quienes incluso visitaron las instalaciones de la empresa para conocer su funcionamiento y desempeño en campo.

La British Petroleum p.l.c también compró créditos a este portafolio al encontrar, según palabras de Andrés Huby, creador de productos ambientales, unos créditos robustos, verificados por VCS y CCB, sumamente atractivos por su origen comunitario y con el respaldo del buen nombre de Fondo Acción.

La cosecha de carbono y las primeras ventas dejaron enseñanzas para Fondo Acción, compradores y comunidades. Pasar del sueño de tener un portafolio verificado a la venta requirió también fortalecer capacidades, diseñar instrumentos claros para todas las partes y, por supuesto, dejar miedos y cerrar brechas entre las comunidades y la empresa privada. Por supuesto fueron claves el marco regulatorio colombiano que crea los incentivos y la facilitación del Fondo.



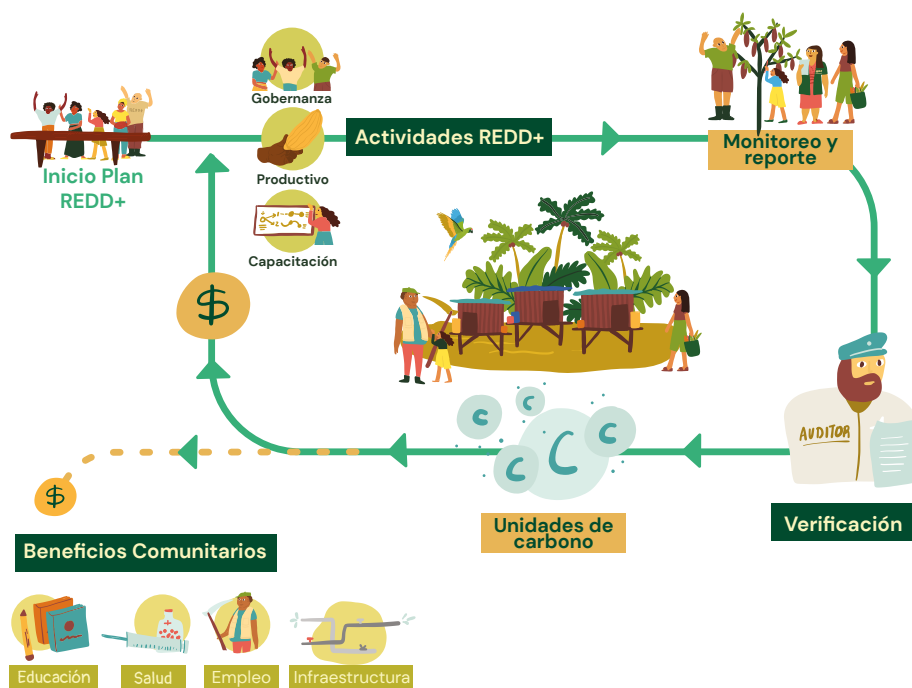
► El mecanismo de distribución de beneficios

Fondo Acción toma una nueva responsabilidad con el portafolio, esta vez como administrador de los recursos derivado de las ventas de créditos. En cada proyecto, los dineros provenientes de las ventas de créditos de carbono serían ejecutados siguiendo un Plan Operativo Anual (POA) diseñado por las comunidades con acompañamiento del Fondo. En esta fase, la gobernanza de las comunidades es un pilar central de construcción. Ruth Valencia, del Consejo Comunitario de La Plata bahía Málaga, lo define así: “Llegar a acuerdos, entender y sentir que es un proyecto propio; que Fondo Acción y todas las organizaciones externas se pueden ir, pero lo que estamos haciendo es para nosotros, para defender nuestro territorio”.

El mandato es claro, los dineros entrantes deben destinarse a la implementación de actividades para reducir la deforestación y degradación del bosque, la conservación de la biodiversidad y el beneficio social. Estas actividades incluyen los componentes de gobernanza, sistemas productivos, monitoreo, reporte y verificación, así como capacitaciones y administración del proyecto. Se desarrollan actividades sociales, como la mejora de viviendas, centros educativos o de infraestructura para la prestación de servicios públicos, una vez se cumplan las actividades mandatorias descritas en el documento de proyecto.

Una vez separados los costos inherentes del proyecto, se calculan los excedentes y se asignan los recursos que se destinarán a las actividades sociales. Estos recursos se administrarán con el Mecanismo de Distribución de Beneficios, siempre bajo la concepción de que estos fondos son comunitarios, deben ser invertidos para el bien común y de manera estratégica, bajo los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, como nos recuerda Jhon Jairo Tuberquia, del Cabildo Mayor Indígena de Mutatá.

► Ciclo del proyecto



Lecciones aprendidas

No ha sido menor la confianza, la fe y el trabajo realizado por las comunidades, así como la apuesta de los donantes, quienes le han apuntado a cambios reales en los territorios más biodiversos y alejados del país. Entre los resultados y lecciones se destacan:

1. 7'055.091 toneladas de emisiones de CO2 equivalentes reducidas. Se delimitaron 466.828 ha para la conservación de la biodiversidad protegiendo a más de 70 especies en peligro de extinción. Estos números hablan por sí solos y dan cuenta de la profundidad del compromiso y esfuerzo de las comunidades, pues superaron con creces la meta planteada inicialmente.
2. Fortalecer las cadenas de valor sostenibles como opciones alternativas a la tala de bosque para mantener el buen vivir de las comunidades ha sido clave para el éxito del portafolio. Se mejoraron las líneas productivas priorizadas obteniendo como resultado 1.783 hectáreas de cultivos mejorados; 2.005 hogares recibieron asistencia técnica y 2.672 familias fueron capacitadas en prácticas productivas sostenibles.
3. Apropiación del proyecto REDD+. Hoy las comunidades son dueñas de su proyecto y lo así lo dejan saber. Para esto, Fondo Acción, los aliados y las comunidades tuvieron diálogos honestos y procesos para entender conceptos, establecer reglas y cumplir acuerdos. Esto se logró también gracias al proceso de capacitación, cuyo enfoque siempre fue llegar a la mayor cantidad de personas posibles de diferentes grupos sociales, buscando mejorar su experticia en diferentes áreas y su capacidad de liderazgo, participación y toma de decisiones. Se realizaron más de 220 cursos de capacitación que contaron con más de 8.550 participantes, de los cuales 2.543 fueron mujeres.
4. El desarrollo de materiales culturalmente apropiados para trabajar temas complejos, nuevos y no siempre cercanos a la realidad de los territorios, demostró ser fundamental. Este tipo de material no solo se vio representado en cartillas sobre REDD+, sino en intercambios étnicos y culturales, documentos legales y contratos aplicados al Chocó Biogeográfico, entre otros; los juegos de rol como Trato Hecho, que busca acercar el concepto de mercados de carbono a las comunidades, fueron muy exitosos. Todo esto generó un real conocimiento del proyecto, su enfoque, los resultados y los beneficios, y mejoró el manejo de expectativas, permitiendo alcanzar el desarrollo y sostenibilidad del portafolio.
5. Fortalecimiento del monitoreo comunitario. Everildys Córdoba resalta la importancia de conocer y caminar el territorio, “quien no conoce, no puede vivir el territorio”, y parte de ese conocer se da gracias al monitoreo

comunitario participativo (MCP), muy relacionado con la valoración del conocimiento ancestral y con la recuperación de la relación directa de las comunidades con el territorio. La potencialización del MCP hizo que el monitoreo y las prácticas requeridas para procesos de verificación fueran realizadas de manera más fácil e hicieran parte del desarrollo comunitario.

6. Enlazar el sistema. Hay oportunidades importantes de enlace con los avances nacionales alrededor del mecanismo REDD+, como la inserción y trabajo concatenado para la puesta en marcha del Sistema Nacional de Salvaguardas y del Sistema de Monitoreo Forestal Comunitario, así como del Inventario Forestal Nacional.
7. Desarrollar las actividades con un equipo local financiado por los proyectos representó un beneficio general para la región, al mejorar las condiciones de empleo (102 personas empleadas) y generar nuevas oportunidades para la consolidación de las cadenas productivas sostenibles (320 técnicos productivos).
8. Las acciones realizadas en el marco del portafolio permitieron obtener resultados de calidad, lo cual se traduce en que hoy los proyectos cumplan con los estándares de oro, VCS y CCB.

La historia de Fondo Acción en el marco de REDD+ ha hecho que la organización crezca y aprenda de los retos diarios que implica consolidar un portafolio de esta naturaleza en el país. Hoy, después de este proceso, entidades nacionales, privadas y regionales reconocen este esfuerzo como un ejemplo de construcción real y sostenible de territorios posibles. Estos son algunos de los principales aprendizajes del Fondo en el marco de la historia REDD+:

1. Indagar para finalmente comprender a profundidad las necesidades e intereses de las comunidades en el marco de su búsqueda de buen vivir fue clave para difundir confianza, enrutar los caminos del portafolio, y generar apropiación por parte de las comunidades de sus proyectos. La confianza entre las comunidades y el Fondo Acción se constituye en el éxito de los resultados de este proceso.
2. Tener un equipo interdisciplinario de las ciencias naturales, sociales y económicas, e ingenierías capaces de ver los retos desde diferentes miradas y proponer soluciones integrales a cada dificultad, siempre escuchando a la comunidad, a los donantes y conciliando visiones entre uno y otro.
3. Encontrar y fortalecer a líderes, hombres y mujeres reconocidas por la comunidad. Esas personas clave que acompañaron a Fondo Acción en su trabajo con la comunidad, pero que también se convirtieron en replicadores

y pilares para otras comunidades, tanto de las experiencias de éxito como de las oportunidades de mejora y riesgos. Estos liderazgos fueron creados a partir del proyecto no por selección cooperante, sino por la concientización de personas de la comunidad sobre la importancia de su participación en el mismo.

4. Desarrollar herramientas culturalmente apropiadas y coherentes con las realidades del territorio permitió tener una interlocución clara con las comunidades, así como una apropiación de los proyectos por parte de las mismas. El diálogo entre pares, entre personas de la misma comunidad, y la comunicación y reproducción de los conocimientos del proyecto fue también fundamental.
5. Cambiar prácticas de aprovechamiento y uso poco sostenibles, que redundan en deforestación y degradación de los bosques solo es posible si existen oportunidades reales de proyectos productivos sostenibles y alternativos. Aquí el desarrollo y puesta en práctica del enfoque de cadena de valor es fundamental para darle sentido a la conservación.
6. Generar empleos locales para las personas que realizaron el trabajo específico para el proyecto (unidad REDD+), asegurando ingresos para estas familias, empleos verdes, locales y sostenibles.
7. Facilitar el diálogo y relacionamiento entre las comunidades como cosechadores y vendedores de los créditos de carbono y los compradores fue fundamental para crear confianza entre las partes.
8. Trabajar en sistema. Mientras hay equipo enfocado en la ejecución de actividades, la unidad técnica coordina sus esfuerzos para hacer economías de escala, compartir, replicar y escalar los aprendizajes en campo a políticas nacionales y espacios de toma de decisión.
9. Desarrollar reglas claras, procedimientos transparentes e instrumentos (por ejemplo, ERPA) que den vida a los diálogos desde el territorio donde nadie lo sabe todo. Comunidad, Fondo, entidades públicas y empresarios pueden aprender.
10. Desarrollar un portafolio de proyectos REDD+ a partir del cual se unan los esfuerzos y los sueños de toda una región. Proyectos independientes no habrían tenido el mismo efecto en la región.
11. Enfocar no solo los proyectos a temas de reducción de deforestación y de alternativas productivas sostenibles, sino incluir un paquete completo de generación de capacidades y mejora de las condiciones sociales. Esto permite la sostenibilidad de los proyectos REDD+ al asegurar también las oportunidades que estos créditos generan para las comunidades y lo que

esto implica en el desarrollo social (mejora de infraestructura de salud, educación, procesos de participación, entre otros).

12. Conectar y articular acciones con los instrumentos normativos y de las políticas existentes o en construcción fue clave para facilitar las experiencias y los conocimientos en el territorio y tomar decisiones en el contexto nacional, pero también para aterrizar estos instrumentos y aplicarlos en el territorio.
13. El papel de la mujer como concedora y replicadora de conocimientos es fundamental en el diseño, implementación y monitoreo de los proyectos REDD+ y, por tanto, es necesario potenciar su participación activa y efectiva en diferentes espacios de toma de decisión y actividades de los proyectos.
14. Establecer diálogos directos con las comunidades, en otras palabras, hablar “de frente” y reconocer las responsabilidades y compromisos que tienen los propietarios de los proyectos para alcanzar los resultados que esperaban y sus beneficios. Esta transparencia aportó también a la generación de confianza entre las comunidades y Fondo Acción.

►► **Hacia dónde vamos**

En diciembre de 2019, el Consejo directivo de Fondo Acción decidió crear una unidad de negocio para el diseño y réplica de proyectos REDD+ en el país. Esta unidad incluye experiencia y capacidad técnica para todos los aspectos de un proyecto REDD+, capacidad administrativa para la distribución de beneficios, la facilitación comercial y el fondeo y se nutre de la experiencia y aprendizajes de la consolidación del portafolio REDD+ Pacífico. Esta unidad responde a los intereses de quienes estén interesados en desarrollar nuevos proyectos REDD+ en Colombia. Así mismo, el Fondo continúa contribuyendo al cumplimiento de las metas nacionales de mitigación y adaptación, a través del fortalecimiento de capacidades, la generación de información, la facilitación de espacios de diálogo y participación, y el desarrollo de pilotos que muestren que es posible, rentable y viable actuar en los territorios y sectores.



**Diseño y
establecimiento
de proyecto**



**Administración de
mecanismos de
distribución de
beneficios**

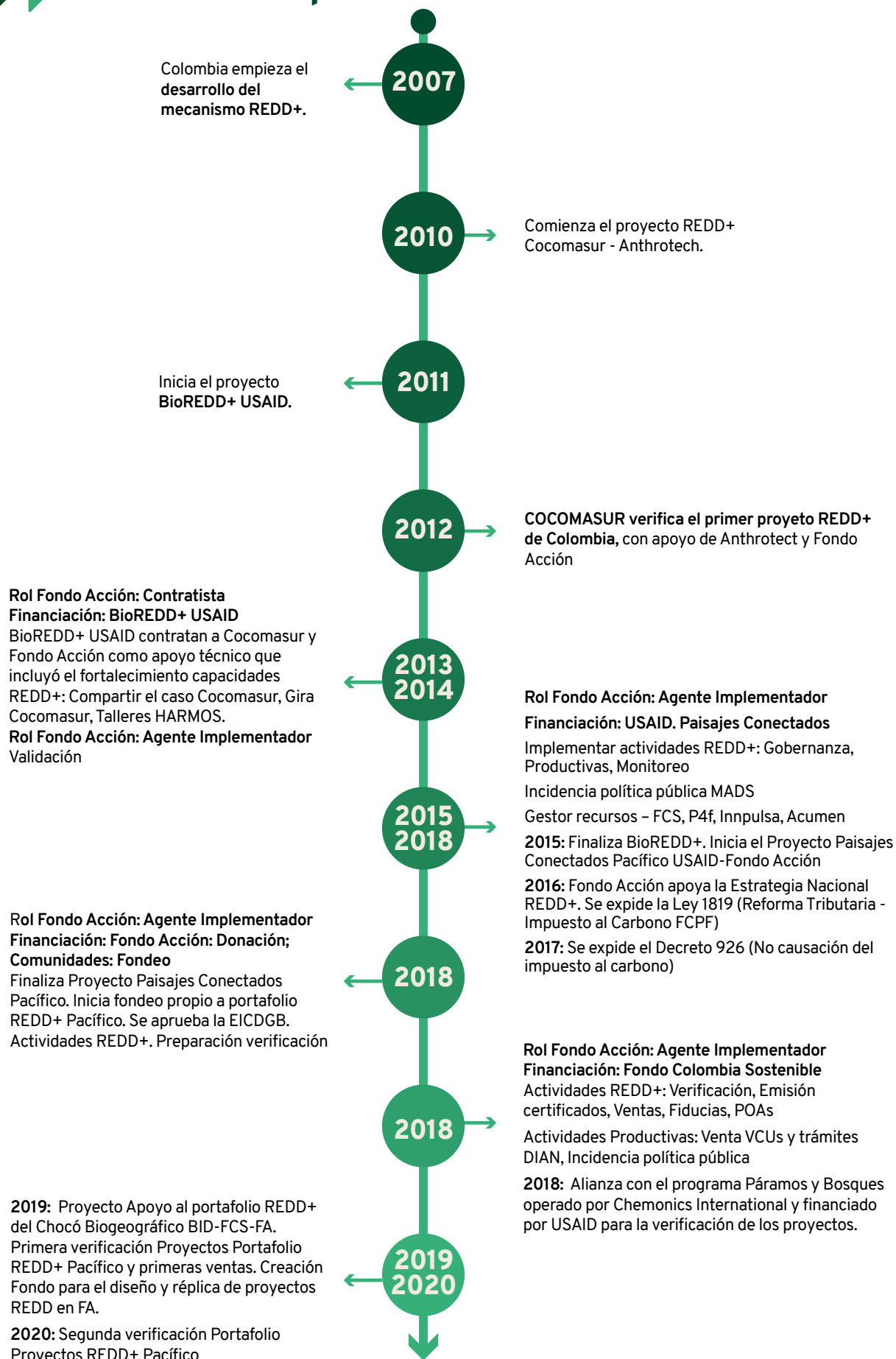


Financiación



Ventas

▶ Línea de tiempo



Bibliografía

- Congreso de Colombia. (29 de diciembre de 2016) Ley 1819 de 2016. *Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones*. DO: 50.101.
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. (s.f). REDD+ Web Platform. Recuperado de <https://redd.unfccc.int/>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). Documentos REDD+. Recuperado de <https://www.minambiente.gov.co/index.php/bosques-biodiversidad-y-servicios-ecosistematicos/reduccion-de-emisiones-de-gases/documentos-redd>
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (1 junio de 2017). Decreto 926 de 2017. *Por el cual se modifica el epígrafe de la Parte 5 y se adiciona el Título 5 a la Parte 5 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria y el Título 11 de la Parte 2 de Libro 2 al Decreto 1076 de 2015 Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, para reglamentar el parágrafo 3 del artículo 221 y el parágrafo 2 del artículo 222 de la Ley 1819 de 2016*. <http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20926%20DEL%2001%20DE%20JUNIO%20DE%202017.pdf>
- Pombo, A., Ferguson, B., Guisado, E., Córdoba, E., Caicedo, F., Salazar, M. Arango, N. & Córdoba, R. (2014). *REDD+, una nueva forma de vivir con la naturaleza. Experiencia del Corredor de Conservación Chocó Darién, Colombia* [PDF]. Recuperado de <https://www.Cocomasur.org/libros/libro-conservacion.pdf>
- Sistema de Información Ambiental de Colombia. (s.f). Pacífico. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Recuperado de <http://181.225.72.78/Portal-SIAC-web/faces/Dashboard/Biodiversidad2/pacifico/pacifico.xhtml>
- Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono. (21 de agosto de 2020). Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Recuperado de <http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/reg/indexLogOn.jsp>
- USAID. (2011). *BIOREDD Brochure*. Recuperado de https://www.climate-links.org/sites/default/files/asset/document/bioredd_brochure_22513.pdf



Somos un fondo privado colombiano con 20 años de experiencia en inversiones sostenibles en ambiente y niñez. Detonamos oportunidades y generamos conexiones que faciliten el aprendizaje y trabajo colectivo dentro de la organización y con otras instituciones tanto públicas como privadas.

www.fondoaccion.org • (+57) 1 285 3862 ext 101 • Cra 7 N° 32 - 33 piso 27 • Bogotá - Colombia

   @FondoAccion